**Dictámenes y Acuerdos correspondientes a la Décima Novena Sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**18 de junio del año 2019.**

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes y Acuerdos en cartera:

**A.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el numeral 9 al artículo 203 del Código Electoral para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**B.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, en conjunto con las diputadas y los diputados del grupo parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del partido revolucionario institucional, por el que se reforma la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de adecuar la competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en los preceptos del código penal del estado.

**C.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 341 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**D.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 406 del Código Penal del Estado, planteada por le Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto”, del Partido de la Revolución Democrática.

**E.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo.

 **F.-** Dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, con relación a una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, que presentan las Diputadas y Diputados integrantes del del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, con el objeto de fomentar la protección y cuidados del alumnado.

**G.-** Acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia por el que se propone al Pleno de este H. Congreso la ratificación de las personas propuestas para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado.

**H.-** Acuerdo presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa popular con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 159 bis a la Ley Estatal de Salud, planteada por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez.

 **I.-** Acuerdo de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas, con relación a unaProposición con Punto de Acuerdo, planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral**.** Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, “Con objeto de exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado, realice las acciones necesarias para implementar programas de sensibilización en el alumnado, profesorado y personal administrativo de las escuelas de educación básica superior y media superior, para compatibilizar la vida estudiantil y la maternidad, con la finalidad de evitar la deserción escolar de las jóvenes estudiantes que son madres o se encuentran embarazadas”.

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el numeral 9 al artículo 203 del Código Electoral para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 26 del mes de abril del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 03 de mayo del año en curso, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el numeral 9 al artículo 203 del Código Electoral para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el numeral 9 al artículo 203 del Código Electoral para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El 16 de mayo del año 2018, se dio a conocer la siguiente noticia:*

***“…INE hará por primera vez un registro de votantes con discapacidad***

*Por primera vez el Instituto Nacional Electoral (INE) hará un registro de las personas con discapacidad que acudan a votar el próximo 1 de julio, indicó la consejera electoral, Adriana Favela Herrera.*

*“Esa es una de las circunstancias que habrá por primera vez en esta elección, solo basta que los votantes nos refieran a la hora de votar que tienen algún tipo de discapacidad”.*

*“Entonces ahora sí vamos a poder saber cuántas personas acudieron y vamos a saber si poseen discapacidad motriz, intelectual, psicosocial, visual o auditiva y esto va ser muy importante”, agregó.*

*Agregó que hasta el momento no existe en el país un registro oficial del número de personas con discapacidad y menos aún una base de datos sobre su participación en los comicios.*

*“Por eso es importante hacer este registro que nunca hemos tenido, y creo que esto nos va a dar insumos muy importantes para poder ir perfeccionando nuestras herramientas para garantizarle a las personas con discapacidad su voto”, comentó.*

*Señaló que por lo pronto el INE mantendrá en las más de 150 mil casillas las diversas herramientas para garantizar el acceso de esta población para que puedan participar sin ninguna restricción.*

*Entre ellas, Favela Herrera expuso que la plantilla braille se insertará en las boletas con el nombre de los candidatos y de los partidos políticos…”* ***Fin de la cita textual.***

*En fecha 13 de octubre del año 2017, se dio a conocer que, de acuerdo a cifras del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés), hay 2 millones 237 mil 626 personas con deficiencias visuales y más de 415 mil 800 con ceguera en México.*

*La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege ampliamente los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, esto en el artículo 1º, que dispone:*

*……Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las* ***discapacidades****, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.*

*Al tiempo que establece que son prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, las siguientes:*

***Artículo 35.*** *Son derechos del ciudadano:*

***I.*** *Votar en las elecciones populares;*

*….*

*Disposición concordante con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 41 del mismo ordenamiento supremo, que a la letra establece:*

*….*

*Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y* ***mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo****, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos…*

*A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece:*

*Artículo 29*

*Participación en la vida política y pública*

*Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:*

*a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:*

*I) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean* ***adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;***

*II) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir* ***su voto en secreto*** *en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;*

*En los años recientes, diversos organismos electorales del país, mediante las atribuciones que les confería la ley, tomaron acuerdos para implementar el sistema braille y garantizar así el voto secreto y libre de las personas invidentes o con escasa capacidad visual, ya que hasta la fecha presente, se les permite votar acompañados de una persona de su confianza para marcar la boleta, hecho que si bien cubre la necesidad de ayuda para este tipo de casos, no garantiza por lógica el voto libre y secreto, al participar una persona- bien intencionada- en el proceso para que vote el ciudadano con este tipo de discapacidad.*

*A nivel federal, en fecha 30 de septiembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo General del entonces denominado Instituto Federal Electoral (IFE), “Por el que se Aprueban los Modelos y la Impresión de la Boleta y los demás Formatos de Documentación Electoral que se Utilizaría durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012.”*

*Del citado Acuerdo, destaca el siguiente punto:*

***Segundo.-****Se aprueba el modelo de mascarilla en* ***escritura Braille*** *para la boleta electoral, para que las personas con discapacidad visual puedan marcar su boleta por si mismos, si así lo desean.*

*Para abreviar, en procesos electorales recientes, diversos estados, por conducto de sus órganos electorales, acordaron la emisión de boletas en sistema Braille para garantizar el voto libre y secreto de las personas invidentes o con algún tipo de discapacidad visual. Entre otros: Durango, Hidalgo, Querétaro y Coahuila.*

*Sin embargo, este tipo de derechos no deben depender de la “buena voluntad” o acuerdos de las autoridades electorales en turno, sino que deben garantizarse de modo permanente y estable en la ley.*

*El Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece:*

*Artículo 214….*

*….*

 *III. Boletas para cada elección en número igual al de los electores que figuren en la lista nominal de su sección; adicionalmente se entregará el mismo número de boletas, que como representantes de casilla hayan acreditado los partidos políticos y candidatos independientes que contiendan en la elección respectiva. A su vez, igualmente serán proporcionadas plantillas* ***Braille*** *para facilitar la emisión del sufragio de personas débiles visuales.*

*El Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, dispone:*

*ARTÍCULO 194. Las boletas para la elección de Gobernador y diputados deberán estar en poder de los consejos electorales de comités distritales, quince días antes de la elección, los consejos electorales de comités municipales deberán recibir las correspondientes a la elección de ayuntamientos a más tardar quince días antes.*

*…..*

*V….*

*El Consejo General dispondrá se provea a las mesas directivas de casilla de un porcentaje de planillas braille.*

*En nuestra investigación hallamos que al menos otros dos códigos electorales locales contemplan el uso de boletas o plantillas braille.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, analizamos las consideraciones en las que se funda y motiva el proyecto de reforma, el cual tiene como objeto adicionar un numeral al artículo 203 del Código Electoral de nuestro estado, en lo concerniente a la documentación y el material electoral, para establecer que el Consejo General disponga lo necesario para que todas las mesas directivas de casilla cuenten con un porcentaje de plantillas braille.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su último párrafo lo siguiente:

*“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”*

Es así, que en nuestro Estado, también se ha venido legislado satisfactoriamente en materia de discriminación, y para los integrantes de esta comisión dictaminadora, resulta de gran relevancia seguir plasmando en nuestros ordenamientos jurídicos, las herramientas que permitan construir mejores relaciones sociales, culturales, económicas y políticas ajenas a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad.

Para los integrantes de esta comisión dictaminadora, las nuevas formas de convivencia democrática a las que debemos aspirar como país, sólo se podrán dar si se eliminan las barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales de las personas, así como su acceso a una igualdad real de oportunidades.

La propuesta encuentra justificación conforme a lo consignado en la exposición de motivos en la necesidad de hacer efectivo el derecho al voto a todas y todos los mexicanos sin discriminación alguna, esto en congruencia con lo dispuesto en el artículo primero y 35 de la Constitución General y 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este orden de ideas, el promovente expone que “[e]n fecha 13 de octubre del año 2017, se dio a conocer que, de acuerdo a cifras del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés), hay 2 millones 237 mil 626 personas con deficiencias visuales y más de 415 mil 800 con ceguera en México”, lo cual hace necesario tomar las medidas pertinentes a efecto de garantizar los derechos humanos de este importante sector de la población, en este caso el derecho al sufragio.

Así, el iniciador toma a manera de referencia los Acuerdos emitidos por el Instituto Federal Electoral (IFE), “Por el que se Aprueban los Modelos y la Impresión de la Boleta y los demás Formatos de Documentación Electoral que se Utilizaría durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el que se determinó, en relación al tema que nos ocupa que “*[s]e aprueba el modelo de mascarilla en* ***escritura Braille*** *para la boleta electoral, para que las personas con discapacidad visual puedan marcar su boleta por sí mismos, si así lo desean”.*

En el mismo sentido, la exposición de motivos alude que en diversas entidades federativas los Consejos Generales de los OPLES, han estado emitiendo Acuerdos con esta misma finalidad, y citan a manera de ejemplo estados como Durango y Coahuila.

Para finalizar con las consideraciones que acompañan el proyecto normativo, el promovente hace hincapié en la necesidad de fijar esto en una ley para evitar dejar el tema al arbitrio de los Consejos Generales y refiere que ello ya se ha realizado en estados como Chiapas y Michoacán.

Agotado el análisis del contenido y alcance de la reforma que a través de esta iniciativa se propone, quienes dictaminamos, previo a pronunciarnos sobre la procedencia o no de la misma, efectuamos una serie de consideraciones que se exponen en los párrafos que a continuación preceden.

El derecho a votar previsto en la fracción I del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una de las formas en que la ciudadanía ejerce el derecho de participación política, e implica que elija libremente y en condiciones de igualdad a sus representantes.

Así el reconocimiento del voto activo para la democracia integral constituye la manifestación real de la ciudadanía y la evidencia efectiva de su condición de pertenencia a una comunidad política.

En este contexto el sufragio cobra especial importancia, por lo que su reconocimiento implica al Estado una serie de deberes que hagan posible garantizar a la ciudadanía su derecho, lo que necesariamente conlleva eliminar obstáculos e implementar medidas que hagan posible su ejercicio.

En algunos casos, las personas que sí tienen el derecho a votar se encuentran en condiciones que materialmente les impiden votar. En este sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estima en la sentencia que recayó al juicio identificado como SUP-JDC.352/2018, que “*ante el derecho al voto, las autoridades tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho”.*

Específicamente en relación con las obligaciones marcadas por el artículo 1 de la Constitución, en diferente grado de acuerdo con su naturaleza, los derechos humanos requieren la no intervención del Estado (respetar), el reconocimiento del derecho (promoción), la protección del Estado frente a terceros para que los individuos puedan ejercer el derecho (protección), **y que el Estado genere una serie de actos ya sean normativos o fácticos (garantía) que en mayor o menor medida implican medidas de acción.**

Así, en cuanto al derecho electoral, Alexy ejemplificaría que la obligación negativa de respetar se vulneraría, por ejemplo, si las mesas de votación se ubicaran en un lugar de difícil acceso o se excluye la posibilidad del voto por correspondencia (obstaculizar).

Esta obligación está intrínsecamente ligada con la obligación de proteger, que implica tomar medidas para impedir que otros agentes o sujetos vulneren los derechos fundamentales de las personas, lo cual comprende desde medidas preventivas hasta creación de procesos jurisdiccionales o sistemas de tutela administrativa.

Ejemplos de la obligación de proteger se observan en la normatividad sustantiva y adjetiva en materia electoral que permite a la ciudadanía exigir su voto libre e informado, así como las sanciones fijadas para casos en que se intente vulnerar tal derecho.

Por su parte, la obligación de garantizar, que implica acciones positivas por parte del Estado (tanto fácticas como normativas), conlleva el deber de asegurar a todo individuo el ejercicio libre y efectivo de sus derechos humanos.

Respecto a esta obligación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que “*para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la Sociedad*”.

Así, el Estado debe cumplir con las obligaciones y ejercer las acciones que se requieran para garantizar el ejercicio del derecho al voto, por ejemplo, la organización del aparato y estructuras gubernamentales para que todos los sujetos de derechos tengan oportunidad de disfrutar de ellos, y políticas públicas, entendidas como el conjunto de decisiones y acciones estratégicamente realizadas para solucionar problemas o deficiencias públicas.

En este sentido, Guastini sostiene que no es lo mismo atribuir un derecho que garantizarlo, para atribuirlo basta con que una norma lo haga, para garantizarlo no es suficiente proclamarlo, sino que es necesario disponer de mecanismos adecuados para ello.

Así, para hacer tangible la justicia constitucional, no basta con atribuir o proclamar un derecho, sino que hay que garantizarlo con medidas que permitan su realización y con procedimientos que permitan su exigibilidad de manera eficaz.

En este contexto los integrantes de la presente comisión, consideramos que la obligación de garantizar se traduce en el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para procurar que las personas sujetas a su jurisdicción disfruten efectiva y plenamente de sus derechos. Más aún en el caso que nos ocupa, en el que las personas invidentes y débiles visuales son vulnerables al potencial abuso de sus derechos, y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Bajo esta misma línea argumentativa, estimamos oportuno referir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto al tema, se ha pronunciado en el sentido de que las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan de deberes especiales, determinables en función de las necesidades particulares de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como es el caso de las personas con algún tipo de discapacidad visual.

En este sentido, desde la perspectiva de un modelo de igualdad sustantiva y estructural en contraste con los modelos de igualdad formal, es menester considerar como relevante la situación de las personas en su individualidad y en su condición de integrantes de un grupo sistemáticamente excluido y mermado en el goce de sus derechos, como es el caso de las personas con algún tipo de discapacidad.

Quienes dictaminamos también tomamos en cuenta los datos referidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que durante el año 2018, a través de su Unidad de Personas con Discapacidad han monitoreado la situación de las personas con discapacidad en relación con su derecho al voto en el contexto de elecciones que hubo en varios países de la región.

Al respecto la Comisión Interamericana recopiló información sobre las tendencias en la región, e identificó que entre las prácticas positivas adoptadas por Estados como Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Venezuela se encuentran la adopción de medidas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidades físicas a los puestos de votación, permitir que las personas con discapacidad que lo soliciten puedan contar con la asistencia de una persona de su elección que los acompañe a la urna de votación, y, la realización de campañas públicas para la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.

De igual forma, la referida Comisión observó que aún siguen existiendo grandes retos para el goce efectivo del derecho al voto de las personas con discapacidad en la región, principalmente, la CIDH observa que la ausencia del reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad conlleva a la negación del derecho al voto de las personas con discapacidad que se encuentran bajo regímenes de tutela o curatela.

A su vez, la CIDH también ha identificado otros desafíos tales como la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial en el ejercicio de su derecho al voto; así como la falta de capacitaciones de los funcionarios electorales con un enfoque de derechos humanos sobre los derechos de las personas con discapacidad, son algunas de las principales problemáticas que persisten en la región.

En este orden de ideas resulta necesario aludir que de acuerdo con la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, los Estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación y promover la integración de las personas con discapacidad en las actividades políticas. Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, esto implica, además de otros derechos, la garantía del derecho al voto como forma de expresión de su voluntad y forma de participar en la vida política y pública de su país.

En similar sentido, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus observaciones finales sobre el informe inicial de México (2014), dispuso en su observación número 55 “Participación en la vida política y pública” (artículo 29) que:

*El Comité se encuentra preocupado por la denegación del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial,* ***y por el hecho de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales no sean accesibles****.*

Por lo que *“[e]l Comité urge al Estado parte a modificar la disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad.* ***Le recomienda también asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean accesibles, tanto en las zonas urbanas como en las rurales”.***

En cuanto hace a la situación de las personas con discapacidad en México, los integrantes de esta comisión observamos que de acuerdo a datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI (MCS-ENIGH, 2014), en 2014, el 6.4% de la población del país (7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una discapacidad, las cuales representan en su mayoría a personas adultas mayores que contaban con 60 años o más (52.1% del total de personas con discapacidad o 3.98 millones de personas). Además, en ese mismo año el principal tipo de discapacidad reportado fue la motriz (37.32% de las personas con discapacidad o 2.6 millones de personas); y tener una enfermedad fue la principal causa de las discapacidades (38.5% del total de discapacidades se deben a esa causa).

Adicionalmente, se estima que en 2014, uno de cada cien hogares del país (o en 6.14 millones de hogares) vivía al menos una persona con discapacidad.

De los datos proporcionados[[1]](#footnote-1), la población con discapacidad de Coahuila de Zaragoza a nivel Nacional representa el **2.70%** (122,185 habitantes). De las más de 122 mil personas con discapacidad; más de 65 mil personas contaban con dificultad para moverse o caminar **y más de 36 mil personas con dificultad visual.**

En base a todo lo anteriormente consignado tomando en consideración que las personas con discapacidad visual pertenecen a un grupo vulnerable y las obligaciones del Estado con respecto a su derecho a votar, es que consideramos procedente el proyecto de reforma.

## Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se adiciona el numeral 9 al artículo 203 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 203.**

1. al 8. …

9. El Consejo General dispondrá lo necesario para que todas las mesas directivas de casilla cuenten con plantillas braille.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, en conjunto con las diputadas y los diputados del grupo parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el propósito de adecuar la competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido en los preceptos del Código Penal del Estado, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 26 del mes de abril del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 03 de mayo de 2019, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, en conjunto con las diputadas y los diputados del grupo parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta el Diputado Jesús Andrés Loya Cardona, en conjunto con las diputadas y los diputados del grupo parlamentario "Gral. Andrés S. Viesca", del Partido Revolucionario Institucional, por el que se reforma la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, por la que se instituye el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los niveles de gobierno, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de recursos públicos. Posteriormente, el 18 de julio de 2016 fue publicada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.*

*Con base a dicha reforma constitucional y a la legislación secundaria, se establece la obligación a las entidades federativas de constituir los propios sistemas locales anticorrupción, debiendo expedir al efecto las leyes y realizar las adecuaciones normativas necesarias para armonizar sus marcos normativos con la legislación nacional.*

*En aras a cumplir con el mandato de nuestra Carta Magna, el 14 de julio de 2017 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la reforma a la Constitución local por la que se crea el Sistema Estatal Anticorrupción y se crea la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, como un organismo especializado en combate a la corrupción, formando parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual se instaura en esa misma reforma, bajo el esquema de un organismo público autónomo, asegurando mayores condiciones de imparcialidad y fortaleza en el ejercicio de la investigación y persecución de los delitos.[[2]](#footnote-2)*

*En plena concordancia, el 12 de septiembre de 2017 se publica la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el objeto de regular la forma de su organización y funcionamiento. Es este ordenamiento el que establece el marco de competencia aplicable a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, prevista en específico en el contenido del artículo 22, en cuya fracción III establece que su Titular tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:*

***Dirigir, coordinar, realizar la investigación y ejercer la acción penal en lo relativo a los delitos establecidos en los artículos del 195 al 214 y del 230 al 232, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza*** *y cualquier otro delito cometido por servidores públicos estatales o municipales en ejercicio de sus funciones y el análisis de su incidencia delictiva, con excepción de los delitos previstos en los artículos 212 bis, 212 bis 1, 212 bis 2, 212 bis 3 y 212 bis 6 del referido Código, ni aquellos que sean competencia de otras unidades administrativas de la Fiscalía General, así como los cometidos por servidores públicos adscritos a la misma, supuesto en el cual se estará a lo dispuesto en esta ley;*

*Es menester señalar que con la publicación y entrada en vigor del Decreto 990,[[3]](#footnote-3) a través del cual se expide el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, se modifica el orden de las conductas antisociales relacionadas con hechos de corrupción, contemplados ahora en el Título Undécimo “Delitos contra la honestidad en el servicio público" y Título Duodécimo “Delitos contra el servicio público cometidos por particulares” del Apartado Segundo, Protección de bienes jurídicos colectivos, del Libro Segundo, Parte Especial del nuevo ordenamiento penal.*

*Ante esta modificación, el titular de la Fiscalía General del Estado ha emitido dos Acuerdos con la finalidad de no entorpecer las investigaciones específicas en materia anticorrupción y fijar la competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, siendo el primero publicado el 10 de noviembre de 2017 y el segundo el 10 de agosto de 2018.*

*Con motivo de lo anterior, se presenta para su estudio, análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de adecuar las atribuciones de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, a lo que establece el Código Penal vigente, dando con ello certeza y seguridad jurídica en el ejercicio de su actuación (…).*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al análisis del objeto y consideraciones de la iniciativa que se dictamina.

De dicho ejercicio, se desprende que el objeto de la propuesta de reforma radica en modificar la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos por Corrupción.

De lo que se desprende en las consideraciones que acompañan al proyecto de reforma, la modificación de la disposición resulta necesaria en virtud de que posterior a las reformas en materia de combate a la corrupción que tuvieron lugar en el año 2017, se expidió un Nuevo Código Penal, el cual contempló por su puesto una nueva numeración del articulado y modificaciones relacionadas con los delitos cometidos por servidores públicos, provocando con ello una antinomia entre lo consignado en la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, y lo estipulado en el Código Penal.

Esto ha provocado problemas en la implementación de la norma, por lo que quienes dictaminamos, posterior al análisis del marco normativo en la materia, coincidimos con el promoverte en la necesidad de realizar esta modificación a efecto de dar solución a la situación señalada.

## Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar de la siguiente manera:

**Artículo 22.** ...

…

**I.** …

**II.** …

**III.** Dirigir, coordinar, realizar la investigación y ejercer la acción penal en lo relativo a los delitos establecidos en los Títulos Undécimo “Delitos contra la honestidad en el servicio público”, con excepción del artículo 439, y Duodécimo “Delitos contra el servicio público cometidos por particulares, del Apartado Segundo, Protección de bienes jurídicos colectivos, del Libro Segundo, Parte Especial, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, siempre que del análisis se desprenda que son presuntos hechos de corrupción.

**IV.** a la **XXV.** …

…

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 341 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 08 del mes de mayo del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 09 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 341 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 341 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño,del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La obediencia al derecho no solo atañe a la moral sino a la política. Todos y cada uno de nosotros ante el Estado y su régimen jurídico somos al mismo tiempo hombres y ciudadanos y por lo tanto tenemos la responsabilidad de obrar de manera congruente en uno y otro rol.*

*Una ley, obliga jurídicamente desde que se le dota de juridicidad, y por tanto de la coacción como garantía para asegurar su cumplimiento lo cual no implica ni excluye que esa ley o norma gocen o no de obligatoriedad moral.*

*Ahora bien, esta coacción la ejerce la autoridad como un poder socialmente otorgado como garantía para asegurar el orden que es la base para que podamos convivir como sociedad. Ahí emana la razón principal de obedecer a las autoridades, porque ellos, en uso de sus facultades son los encargados de asegurar el orden y el bien común en la sociedad. Ahí nace la obligatoriedad de la obediencia al derecho y a la autoridad.*

*Uno de los principios fundamentales de la filosofía del derecho, el que se refiere al bien común, se entiende de manera peculiar bajo la inspiración individualista, donde el bien común sería el conjunto de bienes individuales existentes en determinada sociedad, gracias a la vigilancia y protección mínima que el Estado ejerce sobre los particulares. En realidad, el bien común es, ante todo, un conjunto complejo de factores y condiciones de todo orden (sociales, económicos, políticos) necesarios para posibilitar y favorecer el desarrollo de las personas y de las comunidades.*

*Ya bien lo decía el Miguel Villoro Toranzo “la obligatoriedad sólo se puede dar entre seres inteligentes y libres. Tienen que ser inteligentes para poder entender la racionalidad de lo mandado, y libres para poder obedecerlo”.*

*Lamentablemente hemos visto como en los últimos años a través de las redes sociales como personas agreden impunemente a quienes se encargan de velar por nuestra seguridad, sin que exista castigo alguno por quienes en uso de la violencia agreden a los miembros o integrantes de instituciones de seguridad pública o agentes de tránsito o vialidad.*

*Si bien la ley contempla penas contra el abuso violento de la autoridad, ésta misma no contempla disposiciones que garanticen el respeto y la seguridad que el cargo y las funciones que desempeñan ameritan.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen, la cual adiciona el artículo 341 bis al Código Penal de nuestro Estado, con el propósito de crear la figura de violencia contra miembros o integrantes de instituciones de seguridad pública.

Con la adición anteriormente señalada, se establece una pena de seis meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa a quien ejerza violencia contra un miembro o integrante de instituciones de seguridad pública para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su encargo.

Para esta comisión dictaminadora, no pasa inadvertido que esta iniciativa, responde a la necesidad de tomar cartas en el asunto, ante las agresiones que como bien se expresa en la exposición de motivos, en los últimos años se han venido suscitando impunemente en contra de quienes son los encargados de velar por nuestra seguridad.

Sin lugar a dudas, de las funciones primordiales que tiene el Estado, es la de proveer a sus habitantes de seguridad pública, ya que ello permite una convivencia armónica, el desarrollo pleno de actividades, además, la seguridad pública también es imprescindible, por cuanto que constituye una importante condición social para la generación y atracción de inversiones, el crecimiento económico, y la elevación de la calidad de vida de la población.

Antes de concluir con estas consideraciones, quienes dictaminamos después de hacer un análisis de proporcionalidad, coincidimos en la necesidad de modificar la pena mínima, disminuyéndola a tres meses, ello a efecto de salvaguardar la constitucionalidad de la norma.

Es por ello, que quienes dictaminamos consideramos oportuno implementar acciones que permitan salvaguardar la integridad de aquellos elementos, que bajo su autoridad, tienen la tarea de asegurar el orden para permitir el bien común de la sociedad.

Consideramos, que si bien es cierto, ya existe un apartado referente a delitos contra tareas preventivas de seguridad pública, es oportuno contemplar disposiciones concretas en contra de quienes ejerzan violencia contra miembros o integrantes de instituciones de seguridad pública.

## Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO. -** Se **adiciona** el **artículo 341 bis** al Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 341 bis (Violencia contra miembros o integrantes de instituciones de seguridad pública).**

Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, a quien ejerza violencia contra un miembro o integrante de instituciones de seguridad pública, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales.

Si la violencia a que se refiere el párrafo precedente ocasiona una o más lesiones de las previstas en las fracciones II a VIII del artículo 200 de este código, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al artículo 406 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 30 del mes de abril del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 03 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al artículo 406 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al artículo 406 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Como lo ha sostenido la actual secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde: la precarización del empleo en México, la flexibilización de los derechos laborales fundamentales y la ineficacia de las autoridades del trabajo han dado pie a toda clase de prácticas vejatorias que condicionan al trabajador el acceso a un empleo a la renuncia de sus derechos más elementales. [[4]](#footnote-4)*

*Tales condicionamientos pueden manifestarse a través de la renuncia anticipada del trabajador (renuncia en blanco), la firma de pagarés y otros títulos de crédito, de falsos reconocimientos de que el trabajador no ha padecido accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, o que se desiste de ejercer cualquier acción legal en contra del patrón en el supuesto de que existiera alguna controversia derivada de su relación laboral.[[5]](#footnote-5)*

*Estos hechos convierten a las y los trabajadores en un grupo en situación de vulnerabilidad que, por su dependencia económica, su situación de subordinación y su necesidad económica, es constantemente abusado por los patrones o superiores jerárquicos, no sólo en las empresas privadas sino también en las oficinas públicas y gubernamentales.*

*En la actualidad, no existen estadísticas certeras sobre la cantidad de personas que son obligadas a renunciar a sus derechos laborales mediante amenazas, coacción o algún tipo de condicionamiento. Sin embargo, es bien conocida la estrategia de algunos empleadores de recurrir a una especie de acoso hacia el trabajador, con el fin de cansarlo y obligarlo a renunciar, evitándose así de este modo el pago de las indemnizaciones del caso.[[6]](#footnote-6)*

*En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado y ratificado por el Estado Mexicano, en el cual se reconoce en el artículo 7, el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren las condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.*

*De la misma forma el artículo 123 constitucional en la fracción XXVII incisos g) y h) sostienen que será nula cualquier condición que constituya la renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despido de la obra, así como, todas las estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.*

*De igual forma, el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo sostiene que “Será nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé”.*

*No obstante que la protección de los derechos de los trabajadores, sean de orden público e interés social y estén tutelados en la constitución, los tratados internacionales y las leyes nacionales, en la práctica miles de personas se ven obligadas a firmar sus renuncias, haciendo nugatorios tales derechos ya que existen pocas sanciones para quienes realizan estas prácticas.*

*Dado lo anterior, nuestra propuesta pretende elevar a rango de delito, el forzar a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo, que impliquen renuncia a sus derechos, o les impongan obligaciones a fin de menoscabarlos o anularlos.*

*Consideramos que esta práctica abusiva y rapaz debe erradicarse pues genera inseguridad laboral, un sentimiento de impotencia y un estado de indefensión para el trabajador que pierde su forma de sustento y, por lo tanto, su estabilidad económica.*

*Proteger a los trabajadores es una de las obligaciones que como autoridades tenemos que cumplir, pues el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, depende en gran medida de nuestras acciones como legisladores. Dar seguridad laboral implica dotar de un marco jurídico amplio que trasciende las leyes del trabajo, como lo es en este caso, la reforma que proponemos al Código Penal.”*

**TERCERO.-** Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, analizamos las consideraciones en las que se funda y motiva el proyecto de reforma objeto del presente dictamen, y concordamos con la importancia de reformar nuestro Código Penal, a fin de elevar a rango de delito el forzar a trabajadores a firmar documentos en blanco.

Como su nombre lo indica, una firma en blanco resulta cuando, ante la necesidad de involucrarse en el mercado laboral formal, se acepta rubricar una hoja en blanco como condición al momento de la contratación, que en muchos de los casos se utiliza como una renuncia anticipada, lo que ha dado pie a toda clase de prácticas que limitan a los trabajadores de sus derechos más elementales.

De acuerdo a cifras otorgadas por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en base al cuarto trimestre de 2018, se muestran las tendencias a nivel nacional de personas que laboran dentro de 11 sectores de actividad económica, dato que se muestra a continuación:



De igual manera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en base a la citada encuesta, manifiesta que, para el mes de marzo de 2019 datos preliminares indican que el 60.3% de la población de 15 años y más es económicamente activa; dicha proporción aumentó 0.8 puntos porcentuales en marzo de este año respecto al mes anterior.

A pesar del crecimiento del empleo en México durante los últimos años, especialistas en materia laboral señalan que cuando se exige como condicionante para la contratación la firma de un documento en blanco o sin fecha determinada, firma de pagarés u otros títulos de crédito o cualquier otro documento que implique la renuncia de derechos o imposición de obligaciones innecesarias, conlleva a inhibir el empleo formal.

En base a ello, la presente reforma propone prohibir de forma expresa en nuestra legislación una práctica de la cual nuestra entidad no se encuentra exenta, y con ello establecer garantías para que los trabajadores puedan denunciar este tipo de actos sin poner en riesgo su contratación, sancionando a los patrones que incurren en este delito.

El Código Penal Federal, en su artículo 244, manifiesta que:

***Artículo 244****.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:*

***I.-*** *Poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera;*

***II.- Aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero;***

***III.-*** *Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substancial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación;*

***IV.-*** *Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento;*

***V.-*** *Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;*

***VI.-*** *Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obligaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir;*

***VII.-*** *Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentando como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos;*

***VIII.-*** *Expidiendo un testimonio supuesto de documentos que no existen; dándolo de otro existente que carece de los requisitos legales, suponiendo falsamente que los tiene; o de otro que no carece de ellos, pero agregando o suprimiendo en la copia algo que importe una variación substancia, y*

***IX.-*** *Alterando un perito traductor o paleógrafo el contenido de un documento, al traducirlo o descifrarlo.*

***X.-*** *Elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente.*

Por otra parte el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, contiene el principio de irrenunciabilidad de derechos en los convenios o liquidaciones en materia laboral, señalando lo siguiente:

***Artículo 33.- Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.***

*Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores.*

*Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas.*

No obstante, esta disposición es omisa en cuanto a las renuncias en blanco, lo que perjudica a los trabajadores que, careciendo de medios probatorios para acreditar la simulación de una renuncia, pierden sus derechos fundamentales, en vista de las dificultades técnicas y legales que ello implica.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, consideramos necesario adecuar nuestra legislación penal, a fin de hacer efectivo el derecho de los trabajadores a no ser despedidos injustificadamente, así como garantizar su protección en caso de que sean víctimas de despido simulado a modo de renuncia voluntaria (firma de documento en blanco), sancionando a los patrones que incurran en estas prácticas, con el propósito de un mayor mejoramiento económico y social de nuestro Estado.

## Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona la fracción IX al artículo 406 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 406 …**

**…**

**I. a VIII. …**

**IX.** (Obligación forzosa para firmar una carta o documento en blanco que implique la renuncia de los derechos del trabajador).

El que obligue a los trabajadores a firmar documentos en blanco, o de cualquier otro tipo que impliquen renuncia de los derechos del trabajador, o le imponga obligaciones a éste, con el fin menoscabarlos o anularlos, ya sea que el trabajador labore en una empresa o institución pública o privada.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 09 del mes de abril del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 11 de abril del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Coahuila, planteada por el Diputado Edgar Gerardo Sánchez Garza, de la Fracción Parlamentaria General Francisco L. Urquizo, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Compañeras y Compañeros diputados, hace apenas algunos días la mayoría de los Congresos Locales del País, avalaron una reforma constitucional al artículo 19 en donde se aumentó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de manera oficiosa.*

*En efecto, mediante esta reforma constitucional, se amplió a nueve delitos más los que se hacen por el simple hecho de cometerse acreedores a prisión preventiva oficiosa, siendo estos: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. También se incluye el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea.*

*Uno de los argumentos que se utilizaron para llevar a cabo estas modificaciones a la Constitución Política Federal, es que las personas que son imputadas por esos delitos que se acaban de agregar, evidentemente tienen un alto grado de peligrosidad y una alta probabilidad de pretender evadirse de la acción de la justicia. Por lo tanto, en estos casos el Estado, para salvaguardar la integridad de la sociedad en su conjunto, y la presunción de inocencia, garantiza que estas personas puedan llevar a cabo su proceso privadas de la libertad a través de esta importante figura de la prisión preventiva oficiosa.*

*Así mismo, se considera que quienes cometen este tipo de conductas que ahora son incluidas dentro del artículo 19 de la Constitución Federal impactan de tal grado que generan en la sociedad una sensación de injusticia e impunidad.*

*De igual forma, se sostuvo como argumento totalmente valido en esta reforma constitucional, que el delito de robo se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años y cómo se ha acentuado la presencia de la delincuencia en distintos sectores, por lo que el principal reclamo y demanda de la ciudadanía es precisamente que exista una estrategia frontal para su combate y mayor seguridad.*

*Por otro lado, cabe señalar que nuestra actual legislación penal, en su artículo 13 ya contempla la prisión preventiva oficiosa para algunos de los delitos que apenas se acaban de incorporar al artículo 19 Constitucional, como el Femicidio, la desaparición de persona, abuso o violencia sexual contra menores, delitos cometidos con armas, entre otros, lo cual deja de manifiesto que nuestro Estado siempre está a la vanguardia en cuestión normativa de leyes que regulan la vida en sociedad.*

*Y es precisamente que el día de hoy que se presenta esta iniciativa de ley para que nuestra legislación en materia penal siga estando acorde a las recientes modificaciones en materia constitucional, es decir mediante esta propuesta se pretende homologar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y aún no están contemplados en el Código Penal del Estado.*

*Sin lugar a duda, la reciente reforma a la Constitución Política en su artículo, pretende recomponer el tejido social que se ha visto afectado en la mayor parte del país por el incremento de violencia, la comisión de delitos, pero sobre todo el sentimiento de impunidad que existe en la actual sociedad mexicana por los actos de corrupción que cometen los servidores públicos diariamente, de ahí que nuestro Estado debe ser parte de esa recomposición social que la ciudadanía demanda y adecuaciones u homologaciones legales como las que hoy se proponen, se hacen imprescindibles pues aunque sabemos que todo marco legal siempre es perfectible y evoluciona constantemente, al día de hoy se hace necesario que nuestra legislación penal local este acorde a los cambios que recientemente han sido aprobados a nivel federal.”*

**TERCERO.-**Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, analizamos las consideraciones en las que se funda y motiva el proyecto de reforma objeto del presente dictamen, y concordamos con la importancia de homologar nuestra legislación penal con lo consignado en la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

En este sentido resulta fundamental tomar en cuenta que en sesión celebrada en fecha 27 de marzo del presente año, este Congreso del Estado aprobó mediante Decreto número 248, la Minuta enviada por el Congreso de la Unión por la que se reforma el artículo 19 de la Constitución Federal, en la cual se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Esta reforma tuvo por finalidad incorporar al listado consignado en el referido artículo constitucional los delitos de abuso o violencia sexual contra menores;feminicidio; robo a casa habitación;uso de programas sociales con fines electorales;corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Área y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

En el Dictamen concerniente al tema, esta misma comisión consideró que:

*“Como podemos observar, el marco jurídico que nos rige privilegia el derecho a la libertad de las personas que cometen un delito y la presunción de su inocencia, garantizando que la prisión preventiva oficiosa se utilice únicamente de manera excepcional y en aquellos delitos en que la aplicación de la medida resulta proporcional a los fines que persigue, siendo la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ordenamiento que determina limitantes a este derecho y la aplicación de medidas cautelares.*

*No obstante lo anterior, como ya se ha venido señalando, conforme a los mismos criterios internacionales, la prisión preventiva oficiosa, en circunstancias excepcionales, puede justificarse debido a la peligrosidad presunta o real de la persona, para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Por lo que tomando en consideración lo anterior, y la situación de violencia, inseguridad e impunidad que afecta a las y los mexicanos de manera grave y generalizada en todo el territorio nacional, lo cual se muestra con claridad en las cifras derivadas de la incidencia delictiva, resulta evidente que los mecanismos previstos en el marco normativo actual no han sido suficientes y motivan a buscar nuevas alternativas a efecto de hacer frente a tan compleja problemática.*

*En este sentido, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora, al observar la naturaleza y efectos de esta medida cautelar- como una medida restrictiva de derechos- realizamos un juicio de proporcionalidad verificando que la medida legislativa persigue un fin constitucionalmente válido como lo es el garantizar la seguridad pública, que constituye una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, además la medida resulta proporcional al haberse agotado otros medios menos lesivos que no han podido mitigarla, en el mismo sentido la consideramos idónea y coincidimos en que la consecución de la finalidad perseguida, al ser de orden social e interés general, es mayor que el grado de afectación a los derechos humanos restringidos.*

*En atención a lo anterior, coincidimos con los argumentos vertidos por ambas cámaras en la conveniencia de esta modificación constitucional a efecto de garantizar que en los delitos de mayor impacto, los imputados permanecerán bajo la custodia del sistema de justicia penal, garantizando un buen manejo de la investigación, medida que si bien es cierto, por sí misma no acabará con la situación de violencia que aqueja nuestro país, puesto que esta problemática requiere un tratamiento que trasciende de los efectos de esta reforma Constitucional, si coadyuvará en forma importante a mitigarla, constituyendo además una medida legislativa compatible con los estándares internacionales de derechos humanos.*

Posteriormente a la aprobación y publicación de la reforma en comento, el citado artículo dispone lo siguiente:

***Artículo 19.*** *Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.*

***El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.***

*…*

*…*

*…*

*…*

*…*

En este sentido, los integrantes de esta comisión dictaminadora, considerando el principio de supremacía constitucional, concordamos con el ponente en la pertinencia de homologar nuestro Código Penal acorde a la reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que una vez valorado el alcance de la iniciativa se propone hacer algunas adecuaciones a la misma a efecto de realizar una homologación precisa del ordenamiento local, en este sentido se plantea remitir al artículo 19 de la constitución general y al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Electorales, eliminando las fracciones que comprendían el inciso A) del artículo 13.

Del mismo modo se consideró oportuno modificar la denominación del Título Quinto, para sustituir la frase “desarrollo psicosexual” por “desarrollo de la personalidad”. Igualmente a efecto de que nuestro Código sea acorde con las nuevas disposiciones se plantea la modificación del artículo 448, por lo que hace a su denominación.

Antes de finalizar con las consideraciones de esta dictaminadora, los integrantes estimamos necesario plasmar en las mismas, que de la revisión de la propuesta y del marco constitucional vigente, previmos la necesidad de adecuar el artículo transitorio, a efecto de que las disposiciones locales entren en vigor tal y como se indica en los artículos transitorios de la propia reforma constitucional.

## Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma el primer párrafo del artículo 13, la denominación del Título Quinto, la denominación del artículo 448, del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 13 …**

**A.** …

La prisión preventiva se ordenará oficiosamente en los supuestos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo previsto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

**B.** …

**Título Quinto**

**Delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el desarrollo de la personalidad.**

**Artículo 448 (*Ejercicio abusivo de funciones*)**

**…**

1. a IX. …

**…**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, excepto lo concerniente a los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, que entrarán en vigor conforme a lo establecido en el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se Declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de febrero de 2019.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la LXI Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone adicionar la fracción XVI al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO. -** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, el día 17 de diciembre de 2018, se acordó turnar a esta Comisión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone adicionar la fracción XVI del artículo 7 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada María Esperanza Chapa García conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de fomentar la protección y cuidados en el alumnado.

**SEGUNDO. -** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado turnó a esta Comisión la iniciativa a que se ha hecho referencia, para efectos de estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO. -** Que la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone adicionar la fracción XVI al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, planteada por la Diputada María Esperanza Chapa García conjuntamente con los demás integrantes del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, se basa en la siguiente:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, en un ambiente de armonía, tendientes a desarrollar todas y cada una de las capacidades del ser humano bajo el principio del respeto a los derechos humanos, garantizando así la integridad de las personas.*

*Al abordar el tema educativo en México, es frecuente hacer referencia sobre el bajo nivel de aprovechamiento por parte del alumnado o sobre las condiciones laborales de los docentes. Sin embargo hay una realidad que cada vez más afecta e influye de manera negativa en la educación y que muy pocas veces se plantea, como lo es la violencia al interior de las escuelas.*

*El abuso, el acoso, la intimidación y las burlas son factores que se han convertido en una constante en las escuelas y entre sus iguales, este fenómeno se ha ido incrementando de tal manera que constituye uno de los más grandes retos educativos, y que al no encontrarle una verdadera solución, el aprovechamiento académico se verá perjudicado y opacará la visión que los niños y niñas perciben de su entorno social.*

*Según los profesionales en los temas educativos, la violencia en las escuelas constituye un riesgo en potencia, es decir, ésta es capaz de modificar y causar trastornos conductuales y psicológicos tanto para el agresor como para las víctimas, inclusive para los espectadores, induciendo con ello una perspectiva negativa en su salud física y mental que repercutirá en su aprendizaje y por ende en la calidad y estilo de vida.*

*Hoy en día, no podemos asegurar que todas las escuelas sean un lugar seguro para nuestros niños y niñas y ante esta desafortunada realidad, debemos hacer un alto y empezar a legislar sobre este tema, en vías de encontrar soluciones ante esta grave situación.*

*Según estudios realizados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) las cifras son preocupantes: 7 de cada 10 alumnos de primaria y secundaria han sido víctimas de acoso escolar.*

*Saltillo al ser la capital de nuestro Estado, es el municipio que cuenta con más planteles educativos; los esfuerzos del Ejecutivo del Estado conjuntamente con el Presidente Municipal y la Secretaría de Educación los han llevado a identificar las escuelas con mayor incidencia en esta problemática y a tomar acciones al respecto. Esto no significa que sean las únicas que presentan esta realidad, el resto de las escuelas aunque en menor medida y, ya sea del sector público o privado no quedan exentos de este fenómeno que corre el riesgo de volverse una normalidad en nuestra cultura si no actuamos a tiempo.*

*Las escuelas deberían ser un lugar seguro en donde se pueda experimentar y aprender diferentes formas de convivencia, un espacio donde las diferencias sean enriquecedoras y no sean motivos para generar violencia, un ambiente en donde se potencialice al máximo a los alumnos la oportunidad de aprender a desarrollarse.*

*Sin duda las escuelas deben ser un lugar en donde nuestros niños, niñas y adolescentes se sientan a salvo de comportamientos y actitudes violentas, por lo que es urgente que las autoridades y la sociedad en conjunto actuemos a favor de gestar en armonía el futuro de nuestra nación.*

*Es por ello, que la presente iniciativa propone establecer dentro de los fines y criterios de la educación impartida en el Estado, además de lo que ya establece la garantía del artículo 3° Constitucional, lo relativo a la protección y cuidados del alumnado a fin de que se garantice su integridad y seguridad en las escuelas. ”*

**TERCERO. -** El objeto de la iniciativa planteada, es incorporar dentro de los fines y criterios de la educación el fomento de medidas necesarias para la protección y el cuidado de los alumnos con el fin de preservar en todo momento su integridad física, emocional, psicológica y social, que sean útiles para detectar y prevenir conductas violentas en las instituciones educativas de nuestro Estado.

Al respecto coincidimos en la relevancia que están tomando los valores sociales en el entorno educativo, y que en esto debemos ser repetitivos ya que son la base para construir una cultura de paz en los educandos, y contrarrestar la violencia escolar a la que se encuentran expuestos.

Por ello resulta importante que veamos en cada centro educativo un espacio propicio para construir ambientes de convivencia pacífica, no como contenido programático, sino más bien como una práctica diaria que debe realizarse al interior del grupo, manejando valores como el respeto, la cooperación, el diálogo, la tolerancia entre otros. Siendo estas prácticas las que preparan a los alumnos para una vida social adulta satisfactoria, tanto para ellos como para su entorno.

Finalmente, quienes aquí dictaminamos estamos de acuerdo con la iniciativa planteada, sin embargo, se hicieron algunas modificaciones de técnica legislativa al Proyecto de Decreto planteado por la promovente, toda vez que en fecha reciente se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la adición de la fracción XVI al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación, para incorporar lo relativo a educación financiera, por lo que se adecuó a la fracción XVII del mismo artículo, en los mismos términos planteados por la promovente de la iniciativa, aunque con diferente fracción.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley Estatal de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTICULO 7°.-** ...

I a la XVI...

**XVII.** **Fomentar las medidas necesarias para la protección y cuidados de las y los alumnos, para preservar su integridad física, emocional, psicológica y social, propensas a detectar, prevenir y evitar conductas violentas entre ellos, que atente en contra de su desarrollo y competencias; individuales, sociales e integridad física, sobre una base de respeto y dignidad.**

**T R A N S I T O R I O S**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familia y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de junio de 2019.

**POR LA COMISION DE EDUCACIÓN,**

**CULTURA, FAMILIA Y ACTIVIDADES CÍVICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
|  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA (COORDINADORA)** |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS (SECRETARIO)** |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |  |  |  |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO**  |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |  |  |  |

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA, POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO LA RATIFICACIÓN DE LAS PERSONAS PROPUESTAS PARA INTEGRAR EL CONSEJO ESTATAL CIUDADANO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO.**

La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, tiene a bien emitir este acuerdo, en base a las siguientes:

**C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** Que en fecha 11 de junio de 2019, la Oficialía Mayor de este H. Congreso recibió el escrito número CJ/COE/172/2019 dirigido al H. Congreso del Estado, suscrito por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 82 fracción XXX de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 32 y 33 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, solicita la ratificación a las personas propuestas para integrar el Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado.

**SEGUNDA.-** Que en misma fecha, se recibió en la Oficialía Mayor del H. Congreso, el oficio número CJ/COE/173/2019, dirigido al Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrito por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informa la duración en el cargo de los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado, de acuerdo a lo establecido por el artículo Cuarto Transitorio de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**TERCERA.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 12 de junio del presente año se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, los oficios a que se ha hecho referencia.

**CUARTA.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 13 de junio de 2019, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia los oficios antes mencionados.

**QUINTA**.- Que el viernes 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento que tiene por objeto:

1. Establecer la coordinación entre el estado y sus municipios, para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas;
2. Regular el objeto, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza;
3. Garantizar la participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas;
4. Garantizar la coadyuvancia de los familiares en las etapas de investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias, de acuerdo a los lineamientos y protocolos emitidos por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y
5. Garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, así como la atención, asistencia, protección, garantías de no repetición y en su caso, la reparación integral, en términos de esta ley y la legislación aplicable.

**SEXTA.-** Que la ley mencionada, refiere en su artículo 17 que la Comisión de Búsqueda es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, con autonomía técnica y de gestión, adscrita directamente de la persona titular de éste, que determina, ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, en todo el territorio del estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto en esa ley y en la Ley General.

Asimismo dispone que la Comisión de Búsqueda tiene por objeto impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

**SÉPTIMA.-** Que por su parte el artículo 32 de la misma Ley refiere que “El Consejo Estatal es un órgano ciudadano de consulta de la Comisión de Búsqueda y de las autoridades que forman parte del Mecanismo Estatal en Materia de la Ley y de la Ley General.

**OCTAVA.-** Que en este sentido el artículo 33 de la Ley, establece que el Consejo Estatal estará integrado de la siguiente manera:

1. Cinco miembros designados, en consenso, por los grupos o colectivos de familias de personas desaparecidas en el estado, y solo podrán ser familiares de personas desaparecidas;
2. Un miembro de la academia;
3. Dos expertos en la materia de la Ley General; y
4. Una persona defensora de derechos humanos que designe el Ejecutivo.

**NOVENA.-** Que conforme a lo establecido en el artículo 34 del citado ordenamiento los integrantes del Consejo Estatal deben cumplir con los requisitos que a continuación se describen:

1. Que no hayan sido condenados por delito doloso o haber sido objeto de recomendaciones de organismos públicos autónomos de derechos humanos por violaciones graves a derechos humanos, violaciones en materia de desaparición de personas o sanciones administrativas graves de carácter firme, a quien haya sido funcionario público;
2. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, dentro de los cuatro años previos a su nombramiento;
3. No haber sido servidor público en los cinco años previos; y
4. No tener conflicto de intereses en la búsqueda de personas.

La duración de su función será de tres años, y no podrán desempeñar cargo como servidor público, salvo en los casos de instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

**DÉCIMA.-** Que la multicitada Ley establece entre las atribuciones del Consejo, las siguientes:

1. Solicitar información que requiera para el cumplimiento de su función, a la Comisión de Búsqueda y a las autoridades que forman parte del Mecanismo Estatal;
2. Proponer a la Comisión y a las autoridades del Mecanismo Estatal, acciones para acelerar y profundizar sus labores y hacerlas más eficientes, en el ámbito de sus competencias;
3. Proponer acciones para mejorar el cumplimiento de los programas y protocolos, así como los lineamientos para el funcionamiento de los registros, bancos de datos y herramientas que se establecen en la ley y en la Ley General;
4. Proponer acciones a las instituciones que forman parte del Mecanismo Estatal para ampliar sus capacidades, incluidos servicios periciales y forenses;
5. Invitar a sus deliberaciones a personas expertas, familias, académicos, instituciones nacionales o internacionales, para dialogar sobre temas de competencia del Consejo Estatal;
6. Proponer, acompañar, y en su caso, brindar las medidas de asistencia técnica para la búsqueda de personas;
7. Emitir recomendaciones sobre la integración, operación y ejercicio del presupuesto de la Comisión de Búsqueda;
8. Solicitar información a cualquier autoridad integrante del Mecanismo Estatal para el ejercicio de sus atribuciones, y hacer las recomendaciones pertinentes;
9. Contribuir en la promoción de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos relacionados con el objeto de la ley y la Ley General;
10. Dar vista a las autoridades competentes o a los órganos internos de control por la falta de actuación, omisión, obstaculización de la búsqueda y/o investigación o cualquier otra irregularidad por parte de servidores públicos o autoridades involucradas, en los delitos materia de la Ley General y los que se deriven o hayan dado origen a la desaparición de las personas, así como por las faltas administrativas previstas en las disposiciones aplicables, en que se incurra en la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas;
11. Evaluar el desempeño de la persona titular de la Comisión de Búsqueda;
12. Solicitar al Ejecutivo la destitución de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, por acuerdo de al menos seis de los nueve integrantes;
13. Emitir informes semestrales respecto a los avances y evaluaciones que se lleven a cabo para el debido cumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda y otros temas relacionados con la Ley General de la materia;
14. Emitir comunicados para la sociedad civil;
15. Establecer canales de comunicación con sociedad civil y familiares de desaparecidos;
16. Solicitar a la Comisión Nacional y al Consejo Nacional, la atracción, seguimiento o intervención en casos específicos;
17. Podrá conformar grupos de trabajo y convocar asesorías técnicas por expertos nacionales e internacionales, que acompañen en el diseño, implementación, mejora de las estrategias de búsqueda, del Plan Estatal de Búsqueda y la coordinación interinstitucional;
18. Acceder a la información estadística generada a través de las diversas herramientas con las que cuenta la Comisión de Búsqueda y las autoridades que integran el Mecanismo Estatal para el ejercicio de sus atribuciones;
19. Coordinarse con Consejos Ciudadanos de las entidades federativas y con el Consejo Nacional Ciudadano;
20. Vigilar, supervisar y evaluar la función de la Comisión de Búsqueda; y
21. Las demás que determine el Consejo Estatal, en el marco de sus atribuciones.

**DÉCIMA PRIMERA.-** Que conforme a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del Decreto 155 de 2018, de los nueve consejeros**,** por única ocasión, cuatro de ellos durarán en su encargo dos años y cinco tres años, contados a partir de que tomen protesta del cargo.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** Que conforme a los oficios recibidos por este H. Congreso, las personas propuestas por los grupos colectivos de familias de personas desaparecidas en el Estado, y que durarán en su encargo 3 años, son las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Representantes titulares** | **Representantes suplentes** |
| Diana Iris García | Martha Patricia Casillas Castillo |
| Yolanda Vargas González | María Hortensia Rivas Rodríguez |
| Julio Sánchez Pasillas | Linmara Guadalupe Batres |
| María del Rocío Hernández Romero | Yolanda Morán Isaís |
| María Antonieta Melo Cadena | Norma Patricia Albino Mendoza |

**DÉCIMA TERCERA.-** Que conforme a los oficios recibidos por este H. Congreso, las personas propuestas por el Ejecutivo Estatal con el consenso de los colectivos y que durarán en su encargo 2 años, son las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **Representantes titulares** | **Representantes suplentes** |
| **Por lo que hace a la Academia** |
| Irene Spingo | Karla Patricia Valdés García |
| **Expertos en la Ley** |
| Luis Fernando Vélez Gutiérrez | Michael William Chamberlain Ruiz |
| Juan Calvillo Hernández | Ricardo Rodríguez Reza |
| **Defensor en Derechos Humanos** |
| Blanca Isabel Martínez Bustos | Ariana Denise García Bosque |

**DÉCIMA CUARTA.-** Que a este H. Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 33 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, le corresponde la ratificación de los miembros del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado.

**DÉCIMA QUINTA.-** Que por lo anteriormente expuesto, y habiéndose comprobado que los ciudadanos reúnen los requisitos legales para ocupar los cargos referidos en las consideraciones anteriores, se considera procedente la ratificación de los nombramientos, en virtud de lo cual sometemos a su consideración el siguiente:

**ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA POR EL QUE SE PROPONE AL PLENO DE ESTE H. CONGRESO LA RATIFIACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL CIUDADANO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DEL ESTADO.**

**PRIMERO.-** Se propone al Pleno del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la ratificación del nombramiento de los CC. Diana Iris García; Yolanda Vargas González; Julio Sánchez Pasillas; María del Rocío Hernández Romero, y María Antonieta Melo Cadena, como titulares del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, en atención a lo dispuesto por la fracción I del artículo 33 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEGUNDO.-** Los CC. Diana Iris García; Yolanda Vargas González; Julio Sánchez Pasillas; María del Rocío Hernández Romero, y María Antonieta Melo Cadena, durarán en su encargo 3 años, contados a partir de que rindan la protesta de Ley.

**TERCERO.-** Se propone al Pleno de este H. Congreso la ratificación como suplentes de los ciudadanos a que se hace referencia en el artículo **PRIMERO** del presente acuerdo, en el orden respectivo a los CC. Martha Patricia Casillas Castillo; María Hortensia Rivas Rodríguez; Linmara Guadalupe Batres; Yolanda Morán Isaís, y Norma Patricia Albino Mendoza.

**CUARTO.-** Se propone al Pleno del Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la ratificación del nombramiento de los CC. Irene Spingo; Luis Fernando Vélez Gutiérrez; Juan Calvillo Hernández; y Blanca Isabel Martínez Bustos, como titulares del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, en atención a lo dispuesto por las fracciones II, III, y IV del artículo 33 de la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**QUINTO.-** Los CC. Irene Spingo; Luis Fernando Vélez Gutiérrez; Juan Calvillo Hernández; y Blanca Isabel Martínez Bustos, durarán en su encargo 2 años, contados a partir de que rindan la protesta de Ley.

**SEXTO.-** Se propone al Pleno de este H. Congreso la ratificación del nombramiento como suplentes de los ciudadanos a que se hace referencia en el artículo **CUARTO** del presente acuerdo, en el orden respectivo a los CC. Karla Patricia Valdés García; Michael William Chamberlain Ruiz; Ricardo Rodríguez Reza y Ariana Denise García Bosque.

**SÉPTIMO.-** Emítase el Decreto en el cual se dé cuenta de la ratificación de los nombramientos de los ciudadanos titulares y suplentes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, referidos en los artículos primero, tercero, cuarto y sexto de este Acuerdo y envíese el mismo al Ejecutivo para su promulgación, publicación y observancia.

**OCTAVO.-** Los ciudadanos ratificados Consejeros Titulares y Suplentes rendirán la protesta de ley ante el Ejecutivo Estatal, momento a partir del cual iniciarán sus funciones.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa popular con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 159 bis a la Ley Estatal de Salud, planteada por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 21 de mayo de 2019, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 22 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa popular con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 159 bis a la Ley Estatal de Salud, planteada por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez, para que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, se encargue de cumplir con el trámite para resolver sobre su procedencia, y en caso de considerarse procedente, se realice el turno correspondiente para el estudio y dictamen de la misma, de conformidad a la disposición legal antes citada.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 82, 90 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente acuerdo.

**SEGUNDO.-** Que la Ley de Participación Ciudadana en su Artículo 42, establece los requisitos necesarios para la procedencia de las iniciativas populares, el cual dispone lo siguiente:

***ARTÍCULO 42. LOS REQUISITOS DE LA INICIATIVA POPULAR.*** *Toda iniciativa popular que se tramite ante la autoridad competente en los términos previstos en esta ley, deberá reunir los requisitos siguientes:*

*I. Presentarse por escrito.*

*II. Dirigirse a la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*III. Presentarse con exposición de motivos y con proyecto de articulado.*

*IV. Señalar un domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y/o notificaciones, en el lugar donde resida la autoridad competente para conocer de la iniciativa.*

*V. Nombre y firma de quien la presenta.*

*El solicitante podrá designar un representante para oír y recibir notificaciones, mismo que podrá ser facultado para realizar todos los actos correspondientes al trámite de la iniciativa popular.*

**TERCERO.-** Una vez que ha sido analizada la iniciativa en comento, esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 116 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, emite el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Que la iniciativa popular con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 159 bis a la Ley Estatal de Salud, planteada por el Ciudadano Agustín Javier Durón Pérez, reúne todos los requisitos previstos por el artículo 42 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que se determina declarar procedente la misma, a efecto de que sea sometida al trámite legislativo correspondiente, infórmese al Pleno del Congreso, a fin de que sea turnada a la Comisión que de conformidad a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso del Estado resulte competente, y se emita el dictamen sobre la mencionada iniciativa.

**SEGUNDO.-** De conformidad a lo dispuesto por el artículo 43 fracción II numerales 5 y 7 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, notifíquese al interesado el resolutivo de este acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de iniciativa y asimismo para las intervenciones en su discusión, hágasele saber que si desea hacer uso de este derecho, la Comisión que corresponda oportunamente informará la fecha en que sesionará para discutir y dictaminar la iniciativa de referencia.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 14 de junio de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | **RESERVA DE ARTÍCULOS** |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE****(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO****(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**  | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**ACUERDO** de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se pronuncia sobre la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, “Con objeto de exhortar a la Secretaría de Educación del Estado, realice las acciones necesarias para implementar programas de sensibilización en el alumnado, profesorado y personal administrativo de las escuelas de educación básica superior y media superior, para compatibilizar la vida estudiantil y la maternidad, con la finalidad de evitar la deserción escolar de las jóvenes estudiantes que son madres o se encuentran embarazadas”.

#### R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Que en sesión celebrada el día 28 de mayo de año en curso, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, “Con objeto de exhortar a la Secretaría de Educación del Estado, realice las acciones necesarias para implementar programas de sensibilización en el alumnado, profesorado y personal administrativo de las escuelas de educación básica superior y media superior, para compatibilizar la vida estudiantil y la maternidad, con la finalidad de evitar la deserción escolar de las jóvenes estudiantes que son madres o se encuentran embarazadas”.

**SEGUNDO.-** Que la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, al no haberse planteado como de urgente y obvia resolución, dispuso que la referida Proposición con Punto de Acuerdo, fuera turnado a esta Comisión para efectos de estudio y análisis.

**TERCERO.-** Que en cumplimiento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción X del artículo 278 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la Oficialía Mayor turnó a la Coordinadora de esta Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, la referida Proposición con Punto de Acuerdo para los efectos procedentes.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Educación, Cultura y Actividades Cívicas, es competente para emitir el presente acuerdo, de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 97, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

SEGUNDO.- Que respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca” del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de la Diputada María Esperanza Chapa García, “Con objeto de exhortar a la Secretaría de Educación del Estado, realice las acciones necesarias para implementar programas de sensibilización en el alumnado, profesorado y personal administrativo de las escuelas de educación básica superior y media superior, para compatibilizar la vida estudiantil y la maternidad, con la finalidad de evitar la deserción escolar de las jóvenes estudiantes que son madres o se encuentran embarazadas”, resulta conveniente hacer un análisis del mismo, a efecto de que esta Comisión se pronuncie al respecto.

La Proposición con Punto de Acuerdo planteada, se basa en las siguientes consideraciones:

*“El embarazo adolescente no solo es un problema de salud pública, dado que el mismo es una de las principales causas de muerte materna; el embarazo adolescente es un problema social, por los efectos que tiene en el abandono de los estudios de las adolescentes.*

*De acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018 la tasa en México fue de 77 adolescentes embarazadas por cada mil jóvenes de 15 a 19 años, y la edad de inicio de las relaciones sexuales, en el 23 por ciento de estos números, fue entre los 12 y 17 años. Según las cifras de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ocurren en nuestro país 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.*

*Definitivamente son cifras alarmantes y a esto le sumamos el problema del desempleo y el abandono escolar al enfrentarse a la problemática del nuevo embarazo. Existen estrategias que se han implementado como el Programa de becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, de la Secretaría de Educación Pública, sin embargo, aún tenemos un gran número de deserción escolar.*

*El rezago educativo y la deserción escolar representan distintos factores que tienen un gran impacto en la población y se ha demostrado que la mejor manera de romper ciclos intergeneracionales de la pobreza es a partir de amplificar la trayectoria educativa de las personas, la educación es el medio para garantizar la productividad y la equidad social, además desarrolla la capacidad de innovación y de competitividad, es un espacio para la integración social.*

*Los embarazos en adolescentes vienen acompañados de serios problemas ya que las jóvenes madres pierden el interés por el estudio y en muchas ocasiones se ven en la necesidad de laborar para conseguir el sustento diario ya que muchas veces estos jóvenes no cuentan con el apoyo de familiares.*

*En la mayoría de los casos el embarazo se convierte en un gran obstáculo para culminar sus estudios incrementando así la deserción escolar además de la problemática a la que se ven forzados al aceptar trabajos informales pues con su corta edad no son aptos para laborar en empresas formales y sus oportunidades personales y sociales se limitan seriamente.*

*Es aquí cuando nuestros jóvenes comienzan a ver truncados sus sueños y es entonces cuando debemos darnos cuenta que se les está negando a las niñas y niños el cumplir con una de las etapas más importantes de la vida como lo es la adolescencia, y con ello la no terminación de sus estudios en la educación básica, primaria-secundaria y en la educación media, lo que los lleva a convertirse en madres/padres irresponsables ante la falta de conocimiento en su papel como progenitores.*

*Estamos conscientes que son básicos y necesarios los programas que se implementan en cuanto a prevención de embarazos de adolescentes, pero las cifras demuestran que aun con estos, sigue incrementándose el número de madres adolescentes, y es entonces que resulta de suma importancia implementar programas de sensibilización en el alumnado, profesorado y personal administrativo de las escuelas para lograr compatibilizar la vida estudiantil y la maternidad, es decir debemos crear empatía en nuestras instituciones educativas para alentar a las jóvenes embarazadas o madres a continuar con sus estudios.*

*Ejemplo de acciones para apoyar a estos grupos vulnerables las encontramos en otros países en donde se cuenta con programas como Family Friendly el cual consiste en facilitar la crianza con los estudios, escuelas infantiles, becas para acceder a ellas, modalidad a distancia, o asociaciones de estudiantes en la misma situación. También existen casos en los que si el embarazo requiere reposo les otorgan la posibilidad del servicio de Apoyo Educativo Domiciliario en el cual profesores de apoyo acuden al domicilio de la alumna de 6 a 8 horas por semana y coordinados con los tutores para que el proceso educativo no se interrumpa.*

*No se trata de alentar la maternidad a temprana edad, simplemente estamos a favor de que exista una estructura en la cual las menores cuenten con garantías y apoyo que no las orille a abandonar sus estudios , es decir en muchos casos para que puedan acceder a una beca escolar se les pide un promedio determinado, sin embargo debemos estar conscientes del trabajo que representa la maternidad y combinarlo con los estudios no es fácil, es por ello la necesidad de sensibilizar esa parte, darles oportunidades para desarrollarse sin verse orilladas a pensar que son malas madres o malas estudiantes. Se debe conciliar la maternidad, estudios o desarrollo laboral.*

*Es por lo anterior, que resulta sumamente necesario exhortar a la Secretaría de Educación para que realice las acciones necesarias para implementar programas de apoyo y sensibilización en el profesorado, alumnado, personal administrativo de las instituciones educativas y poder garantizar la continuidad de los estudios de las menores embarazadas y madres adolescentes.”*

**TERCERO. -** Estamos conscientes que el embarazo en adolescentes debe ser un tema de atención prioritaria en la agenda pública, se deben generar estrategias y proyectos focalizados para el apoyo de las mujeres que son madres adolescentes con la finalidad de reducir los índices de deserción escolar que existe en nuestro Estado.

Los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas nos sumamos a la Proposición con Punto de Acuerdo planteada y analizada en el cuerpo del presente, y coincidimos en la necesidad de implementar más programas de sensibilización en el alumnado, profesorado y personal administrativo de las escuelas para lograr compatibilizar la vida estudiantil y la maternidad, ya que tal y como se señala en la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo, se debe seguir con los programas de prevención de embarazos en adolescentes sin dejar de brindar atención a las menores que se encuentran embarazadas o que ya son madres y pueden seguir estudiando.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, se pronuncia a favor de la Proposición con Punto de Acuerdo planteada y por ello tiene a bien emitir el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se estima procedente enviar un atento exhorto a la Secretaría de Educación del Estado, a efecto de que realice las acciones necesarias para implementar programas de sensibilización en el alumnado, profesorado y personal administrativo de las escuelas de educación básica superior y media superior, para compatibilizar la vida estudiantil y la maternidad, con la finalidad de evitar la deserción escolar de las jóvenes estudiantes que son madres o se encuentran embarazadas.

**SEGUNDO.-** Notifíquese lo anterior, a la Oficialía Mayor para los efectos legales procedentes.

Así lo acuerdan las y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de junio de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIAS**

**Y ACTIVIDADES CÍVICAS DE LA LXI LEGISLATURA.**

**DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA**

**COORDINADORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS****SECRETARIO** |  | **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIP. DIANA PATRICIA GONZÁLEZ SOTO** |  | **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN** |

1. <http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=05#tabMCcollapse-Indicadores> [↑](#footnote-ref-1)
2. Decreto número 903. [↑](#footnote-ref-2)
3. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 27 de octubre de 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ver. <http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/sep/20140918-III/Iniciativa-2.html> [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibidem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ver. <https://www.gerencie.com/diferencia-entre-despido-y-renuncia-forzada.html> [↑](#footnote-ref-6)